

**EL DERECHO AMBIENTAL EN CATALUÑA**  
**(SEGUNDO SEMESTRE 2016)**

*p. 1-19*

---

**EL DRET AMBIENTAL A CATALUNYA (SEGON SEMESTRE 2016)**

*p. 20-37*

LUCÍA CASADO CASADO

*Profesora Titular de Derecho Administrativo/Professora Titular de Dret Administratiu*

*Universitat Rovira i Virgili*

---

*Subdirectora*

*Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)*

**Sumario:** 1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña. 1.1. Novedades en materia de aguas. 1.2. Novedades en materia de residuos. 1.3. Novedades en materia de patrimonio natural y biodiversidad. 1.4. Otras normas de interés. 2. Derecho y políticas ambientales autonómicas. 2.1. La declaración de inconstitucionalidad del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear creado por la Ley 12/2014, de 10 de octubre. 2.2. Las discrepancias competenciales entre el Estado y Cataluña en torno a la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso a la actividad económica. 2.3. Novedades de carácter organizativo. 2.4. El Plan de gestión de los espacios naturales de protección especial de Cataluña 2015-2020 queda sin efecto. 2.5. Otros aspectos de interés.

## **1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña**

Durante el período objeto de análisis (del 21 de abril al 30 de septiembre de 2016), a nivel estatal, hemos asistido a una parálisis de la actividad normativa en materia ambiental. Esta situación se justifica por la coyuntura política actual, con un gobierno en funciones desde el 22 de diciembre de 2015, con dos elecciones ya celebradas y sin haberse constituido todavía un nuevo gobierno, con la posibilidad, aún no descartada, de unas terceras elecciones. No debe extrañar, por tanto, que hayan sido muy pocas las

normas ambientales que han visto la luz en este período y que todas ellas sean de rango reglamentario.

Sí cabe destacar la aprobación, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, en la sesión celebrada el viernes 22 de abril de 2016, de la asignación individual de derechos de emisión al tercer conjunto de instalaciones que solicitan asignación como nuevos entrantes del período 2013-2020 y se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Asimismo, existen algunas actuaciones destacables en el ámbito internacional. Entre ellas, destacamos el Acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Economía y Hacienda de España y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo relativo al fondo de cooperación España-BERD para la energía sostenible en países receptores de Asistencia Oficial para el Desarrollo, hecho en Londres y Madrid el 19 y 26 de octubre de 2007<sup>1</sup>; y las Enmiendas nº 1 y nº 2 a este Acuerdo suscritas por el Ministerio de Economía y Competitividad de España y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo<sup>2</sup>. Asimismo, cabe mencionar la Enmienda al Anexo III del Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional para la inclusión del metamidofos (Decisión RC-7/4, adoptada en Ginebra el 15 de mayo de 2015)<sup>3</sup>; y las Enmiendas a los Anexos 2 y 3 y a la Tabla 1 del Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias afroeuroasiáticas, adoptadas en Bonn el 14 de noviembre de 2015, mediante la Resolución 6.1<sup>4</sup>.

Como viene siendo habitual, también se ha puesto de manifiesto en este período la conflictividad competencial entre Estado y comunidades autónomas. Buena prueba de ellos son los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley de la comunidad autónoma del País Vasco 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental

---

<sup>1</sup> BOE núm. 103, de 29 de abril de 2016.

<sup>2</sup> BOE núm. 132, de 1 de junio de 2016.

<sup>3</sup> BOE núm. 145, de 16 de junio de 2016.

<sup>4</sup> BOE núm. 118, de 16 de mayo de 2016.

para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica<sup>5</sup>; por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Mixto contra el art. 5 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la comunidad autónoma de Aragón, en cuanto a las modificaciones introducidas en determinados preceptos de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón<sup>6</sup>; y por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra los apartados 3 a 8 de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes<sup>7</sup>. Asimismo, el Gobierno de Cataluña ha planteado algunos conflictos positivos de competencia contra algunos reglamentos estatales<sup>8</sup>.

Por otra parte, a través de sendos Acuerdos de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, se han resuelto las discrepancias competenciales entre el Estado y Cataluña suscitadas en torno a la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la nueva redacción dada a determinados preceptos de la Ley 42/2007; y en relación con el artículo 13 y los anexos I y II de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso a la actividad económica, aunque no se ha evitado la interposición, por parte del Presidente del Gobierno, de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 19.6 de esta Ley<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 26 de abril de 2016 (BOE núm. 109, de 5 de mayo de 2016).

<sup>6</sup> Admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 7 de junio de 2016 (BOE núm. 144, de 15 de junio de 2016).

<sup>7</sup> Admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 10 de mayo de 2016 (BOE núm. 121, de 19 de mayo de 2016).

<sup>8</sup> *Vid.* los conflictos positivos de competencia promovidos por el Gobierno de Cataluña contra determinados preceptos del Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición, por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, de créditos de carbono del Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector de la empresa “PIMA Empresa” para la reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones, admitido a trámite por Providencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 26 de abril de 2016 (BOE núm. 109, de 5 de mayo de 2016); y contra determinados preceptos del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficacia energética, en lo referente a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, admitido a trámite por Providencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 7 de junio de 2016 (BOE núm. 144, de 15 de junio de 2016).

<sup>9</sup> *Vid. infra*, el apartado 2.2 de esta crónica.

### *1.1.Novedades en materia de aguas*

En relación con las aguas, la norma más importante aprobada en el período objeto de análisis es el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16 de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad. Mediante este Real Decreto, se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, con el fin de incorporar al ordenamiento español la Directiva 2013/51/Euratom del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se establecen requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano. Así, se adoptan nuevos criterios básicos para la protección de la salud de la población contra los peligros derivados de las radiaciones ionizantes, naturales o no, para las aguas de consumo humano y se mantienen, al mismo tiempo, las líneas generales de control establecidas en dicha norma. Para ello, se modifican diversos artículos del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, y se incorpora al mismo un nuevo anexo X (“Control de sustancias radiactivas en aguas de consumo humano”), con la finalidad de recoger en él todas las particularidades relativas al control de las sustancias radiactivas en las aguas de consumo humano.

Igualmente, esta norma modifica el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, introduciendo nuevas definiciones en su artículo 2, modificando los requisitos para las aguas de manantial envasadas para el consumo humano contenidos en el artículo 14.2.b) y en el anexo IV, e introduciendo, además, un nuevo anexo VII (“Control de la dosis indicativa en las aguas de manantial y características de la ejecución analítica”).

Finalmente, también modifica el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano, incorporando nuevas definiciones en su artículo 2, modificando los requisitos para las aguas preparadas envasadas para el consumo humano contenidos en el artículo 11.b) y en la parte D del anexo I, e incorporando un nuevo anexo III (“Control de la dosis indicativa en las aguas preparadas envasadas para el consumo humano y características de la ejecución analítica”).

A esta norma, se suman otras de alcance más concreto, también aprobadas en este período. Nos referimos al Real Decreto 335/2016, de 23 de septiembre, por el que se prorroga la situación de sequía declarada para el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar por el Real Decreto 355/2015, de 8 de mayo, y para el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura por el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo; y a la Orden AAA/1099/2016, de 6 de julio, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, para los meses de julio, agosto y septiembre de 2016, a razón de 20 hm<sup>3</sup>/mes.

### *1.2. Novedades en materia de residuos*

En materia de residuos, destacamos la aprobación de la Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Esta norma, dictada al amparo del artículo 149.1.23 de la CE, tiene el carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente e incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/1127, de la Comisión, de 10 de julio de 2015, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

Mediante esta Orden, únicamente se acomete la modificación de la operación de valorización RI «Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía» del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Esta modificación puede realizarse gracias a que la disposición final tercera de la Ley 22/2011 habilita al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a actualizar y modificar sus anexos.

### *1.3. Novedades en materia de patrimonio natural y biodiversidad*

En el ámbito del patrimonio natural y la biodiversidad, se han aprobado dos Órdenes ministeriales de interés. Por una parte, la Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, ha modificado el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. En particular, se incorporan al anexo del mencionado

Real Decreto, que contiene la relación de Especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y, en su caso, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, distintas especies, subespecies y poblaciones que no figuraban con anterioridad y otras se cambian de situación dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, con el fin de proceder a su adaptación a la información científica actualizada disponible.

Por otra, mediante la Orden AAA/1366/2016, de 4 de agosto, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.<sup>a</sup> de la Constitución y en ejercicio de las competencias de desarrollo y ejecución del artículo 149.1.23.<sup>a</sup> que han sido reconocidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, se han declarado zonas especiales de conservación de lugares de importancia comunitaria de la Región Marina Mediterránea de la Red Natura 2000, se aprueban sus correspondientes medidas de conservación y se propone la ampliación de los límites geográficos de dos lugares de importancia comunitaria.

Asimismo, mediante la Resolución de 1 de agosto de 2016, de Parques Nacionales, se ha publicado la aprobación por la UNESCO de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional (España y Portugal).

En otro orden de cosas, cabe destacar, en este ámbito, la adopción de un acuerdo por parte de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad. A través de este acuerdo, ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación con el artículo único de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la nueva redacción dada a determinados preceptos de la Ley 42/2007<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Pueden consultarse los términos de este Acuerdo en el BOE núm. 157, de 30 de junio de 2016, y en el DOGC núm. 7152, de 30 de junio de 2016.

#### *1.4. Otras normas de interés*

Además de las normas reseñadas, en el período objeto de análisis pueden mencionarse otras normas de interés en ámbitos sectoriales diversos. Destacamos, entre ellas, en materia de minas, el Real Decreto 294/2016, de 15 de julio, por el que se establece el procedimiento para la gestión de los derechos mineros y de los derechos del dominio público de hidrocarburos afectados por el cambio del sistema geodésico de referencia; en materia de sustancias peligrosas, la Orden PRE/772/2016, de 19 de mayo, por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos; y, en materia de salud en el ámbito laboral, el Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.

Por último, mencionamos también la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas en ámbitos diversos (Reales Decretos 197/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020; 254/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020; y 278/2016, de 24 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de programas de voluntariado en el marco del plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales; y Orden AAA/1433/2016, de 5 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental).

## **2. Derecho y políticas ambientales autonómicas**

En el período examinado (del 21 de abril al 30 de septiembre de 2016), la actividad normativa en materia ambiental, a nivel de la Administración de la Generalitat, ha sido prácticamente inexistente. No se ha aprobado ninguna norma de rango legal en este ámbito y un solo Decreto, en el ámbito organizativo, para regular la reestructuración del Departament de Territori i Sostenibilitat (el Decreto 277/2016, de 2 de agosto). Más allá de este Decreto, la actuación normativa se reduce a algunas pocas órdenes sobre temas menores, aprobadas en el seno del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Estamos, pues, ante un período de “sequía” en las políticas ambientales y en la aprobación de nuevas normas sustantivas en Cataluña. No hay, por tanto, novedades normativas relevantes. Antes bien, las novedades más destacables desde un punto de vista normativo vienen marcadas no por la aprobación de nuevas normas, sino por la declaración de inconstitucionalidad de las previsiones normativas recogidas en determinados preceptos de la legislación catalana en materia ambiental, con su consiguiente anulación; y por las discrepancias competenciales suscitadas en torno a alguna ley catalana. Por una parte, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de la regulación del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, creado y regulado por la Ley 12/2014, de 10 de octubre (Sentencia 74/2016, de 14 de abril). Por otra, se han solventado, mediante Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, algunas discrepancias competenciales con el Estado en torno a la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica, si bien no se ha evitado la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 19.6 de esta Ley.

En cuanto a las iniciativas legislativas, tampoco ha iniciado su tramitación en el Parlament ningún nuevo proyecto de ley específico en materia ambiental, aunque mencionamos, por su conexión con la materia ambiental, el Proyecto de Ley de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales<sup>11</sup>. Asimismo, continúa su curso la tramitación del Proyecto de Ley de cambio climático, del que se daba cuenta en la

---

<sup>11</sup> La iniciativa ha sido publica en el BOPC núm. 206, de 8 de septiembre de 2016.



crónica anterior<sup>12</sup>. En esta materia, el Gobierno, en su sesión de 26 de abril, también ha acordado dar apoyo al Acuerdo de París sobre cambio climático, manifestando su compromiso en la lucha contra el cambio climático y su voluntad de contribuir a los objetivos establecidos en dicho Acuerdo, con arreglo a la capacidad y potencialidad de la sociedad catalana. Asimismo, ha acordado revisar los objetivos establecidos tanto en el ámbito de la mitigación como de la adaptación, y presentar una nueva contribución prevista, determinada como muy tarde en 2020, en el marco de los compromisos establecidos por la Unión Europea, e instar al conjunto de la sociedad catalana para que también haga explícito su apoyo al Acuerdo de París<sup>13</sup>.

Por otra parte, se ha anunciado, desde el Departament de Territori i Sostenibilitat, que se iniciarán los trabajos para preparar una nueva Ley de calidad ambiental. A través de la Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Ley 20/2009, de prevención y control ambiental de las actividades, este Departament ya ha planteado los objetivos estratégicos y operativos que debe tener el nuevo texto legal<sup>14</sup>.

En el ámbito de la planificación, lo más destacable es que se deja sin efectos el Plan de gestión de los espacios naturales de protección especial de Cataluña 2015-2020, que habrá de reformularse en el marco de una nueva ley de biodiversidad y patrimonio natural.

En cuanto a la planificación hidrológica, dentro del actual proceso de revisión del Plan de Gestión de la cuenca fluvial de Cataluña, en el período analizado, ha comenzado la fase de retorno del proceso participativo para la gestión del agua en Cataluña<sup>15</sup>. En esta fase, tras analizar los resultados del proceso participativo y las propuestas presentadas por los diferentes participantes, la Agencia Catalana del Agua, después de analizar y estudiar las propuestas surgidas de la sociedad civil para elaborar el nuevo Plan, debe

---

<sup>12</sup> Pueden consultarse los diferentes trámites realizados hasta ahora y el estado actual de la tramitación de este proyecto de ley en el siguiente enlace: <<http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=200-00001/11&ad=1>> [última consulta, 13 de octubre de 2016].

<sup>13</sup> Vid. el contenido de este Acuerdo en el siguiente enlace: <[http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/acords\\_govern/2016/2016\\_04\\_26/SIG16TES0530.pdf](http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/acords_govern/2016/2016_04_26/SIG16TES0530.pdf)> [última consulta, 13 de octubre de 2016].

<sup>14</sup> Vid. el comunicado de prensa del *Departament de Territori i Sostenibilitat* de 15 de julio de 2016 (<[http://premsa.gencat.cat/pres\\_fsvp/docs/2016/07/15/09/47/eb8f4224-eefd-410f-a4ec-1adad2711ff9.pdf](http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2016/07/15/09/47/eb8f4224-eefd-410f-a4ec-1adad2711ff9.pdf)> [última consulta, 13 de octubre de 2016]).

<sup>15</sup> Vid. la nota de prensa del *Departament de Territori i Sostenibilitat* de 24 de abril de 2016 (<[http://premsa.gencat.cat/pres\\_fsvp/AppJava/notaprensavw/292411/ca/comenca-fase-retorn-proces-participatiu-gestio-laigua-catalunya.do](http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notaprensavw/292411/ca/comenca-fase-retorn-proces-participatiu-gestio-laigua-catalunya.do)> [última consulta, 13 de octubre de 2016]).

rendir cuentas a la ciudadanía y determinar qué propuestas se han incorporado y cuáles no, con las correspondientes justificaciones. A estos efectos, se han previsto diferentes sesiones en que se convocará a todos los participantes.

Por último, mencionamos también la aprobación por la Agencia Catalana del Agua, a finales de julio, del programa de conservación de cauces 2016, en el que se recogen las actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces públicos del distrito de cuenca fluvial de Cataluña para este año<sup>16</sup>.

### *2.1. La declaración de inconstitucionalidad del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear creado por la Ley 12/2014, de 10 de octubre*

Recientemente, se ha publicado en el BOE la Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2016, de 14 de abril de 2016<sup>17</sup>. Esta Sentencia declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los artículos 1.1.c) y 21 a 30 de la Ley del Parlament de Catalunya 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, que regulaban este último impuesto.

El impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, regulado en la citada Ley, tiene por objeto gravar “los riesgos por el impacto y eventual daño en el medio ambiente derivados de la actividad de producción de energía eléctrica de origen nuclear efectuada en el territorio de Cataluña” (art. 21), y su hecho imponible es “la utilización de combustible nuclear para la producción de energía eléctrica, por el efecto que puede tener en el medio ambiente y por el daño que eventualmente puede producir en él” (art. 23). Para el Tribunal Constitucional, la regulación de este impuesto es inconstitucional, por existir equivalencia entre este impuesto y el impuesto estatal sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoelectrónica (regulado en los arts. 12 a 18 *quater* de la Ley

---

<sup>16</sup> Vid. la nota de prensa del *Departament de Territori i Sostenibilitat* de 29 de julio de 2016 (<[http://premsa.gencat.cat/pres\\_fsvp/AppJava/notapremsavw/294701/ca/lagencia-catalana-laigua-aprova-programa-conservacio-lleres-2016.do](http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/294701/ca/lagencia-catalana-laigua-aprova-programa-conservacio-lleres-2016.do)> [última consulta, 13 de octubre de 2016]).

<sup>17</sup> BOE núm. 122, de 20 de mayo de 2016.

15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en la redacción dada por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras). En efecto, el Alto Tribunal afirma que

[...] la coincidencia entre los elementos esenciales permite concluir no sólo que se grava la misma actividad, sino que se hace también desde la misma perspectiva, sin que obste a la anterior conclusión la parcial afectación de su recaudación a la necesidad de financiar actuaciones de protección civil que, en todo caso, sería esencialmente coincidente en ambos tributos. No se trata ahora, como se afirma en el escrito de la representación procesal de la Generalitat de Cataluña, de un supuesto similar al decidido en la STC 60/2013, FJ 4, en el que se descartó la inconstitucionalidad del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, en su modalidad de gravamen sobre las “actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del nitrógeno” previsto en el art. 2.1 a) de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005. Allí establecimos, efectivamente, que cabe gravar la misma actividad desde dos perspectivas diferentes, concluyendo que no había coincidencia entre el tributo autonómico y el impuesto especial sobre la electricidad, regulado por la Ley 38/1992 de impuestos especiales.

No sucede así en el presente caso, en el que a partir de lo expuesto debemos concluir que las citadas coincidencias sustanciales, en los elementos esenciales de ambos impuestos, suponen la vulneración de los arts. 133.2 y 157.3 CE, así como del art. 6.2 LOFCA, por lo que debe declararse la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 1.1 c) y 21 a) 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear (FJ 4°).

Existe, sin embargo, un voto particular a la Sentencia formulado por el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, que manifiesta su discrepancia con la fundamentación jurídica y con el fallo de la Sentencia, en cuya opinión hubiera debido ser desestimatorio.

*2.2. Las discrepancias competenciales entre el Estado y Cataluña en torno a la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso a la actividad económica*

La Ley catalana 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso a la actividad económica, ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad, promovido por el Presidente del Gobierno contra el artículo 19.6<sup>18</sup>. Este recurso de inconstitucionalidad ha sido admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional, mediante Providencia de 28 de abril<sup>19</sup>. En la medida en que el Presidente del Gobierno había invocado el artículo 161.2 de la CE, se produjo la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado desde la fecha de interposición del recurso —25 de abril de 2016—, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros. Dicha suspensión ha sido levantada por el Pleno del Tribunal Constitucional, mediante Auto de 20 de septiembre de 2016<sup>20</sup>.

Aun cuando el recurso de inconstitucionalidad únicamente se ha planteado contra el artículo 19.6, las discrepancias competenciales entre el Estado y Cataluña han acompañado a otros preceptos de la Ley 16/2015. Así, inicialmente, además del artículo 19.6, también se cuestionaban el artículo 13, que incluye los regímenes de intervención aplicable a las actividades económicas inocuas y a las actividades económicas de bajo riesgo que se desarrollan en un establecimiento, y los anexos I y II de esta Ley, en los que se recogen, respectivamente, las actividades sometidas a régimen de declaración

---

<sup>18</sup> Este precepto modifica las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 79 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril. Este precepto regula la constitución de entidades municipales descentralizadas, de acuerdo con diferentes reglas. La iniciativa corresponde indistintamente a la mayoría de los vecinos interesados o al ayuntamiento correspondiente; y, tras la modificación operada por la Ley 16/2015, se impone que, en caso de que la iniciativa corresponda a la mayoría de los vecinos interesados, el ayuntamiento debe adoptar el acuerdo en el plazo de un mes a contar desde la presentación de la petición en el registro municipal; y que este acuerdo determine las competencias que, de acuerdo con el artículo 82, tiene que asumir la entidad, y el sistema de participación en los ingresos del ayuntamiento. El acuerdo debe someterse al trámite de información pública por un plazo de un mes. Trascurrido este plazo, debe remitirse al departamento competente en materia de administración local, junto con la resolución de las alegaciones presentadas, la cual debe adoptarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de los miembros de la corporación. También debe realizarse la remisión cuando el expediente se ha iniciado a instancia de los vecinos, aunque el acuerdo municipal no sea favorable.

<sup>19</sup> Vid. DOGC núm. 7117, de 9 de mayo de 2016. BOE núm. 109, de 5 de mayo de 2016.

<sup>20</sup> BOE núm. 235, de 29 de septiembre de 2016.

responsable (las actividades económicas inocuas), y las sometidas a régimen de comunicación (las actividades económicas de bajo riesgo). Sin embargo, la impugnación del artículo 13 y de estos anexos se ha evitado gracias a un Acuerdo adoptado por la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley 16/2015, con arreglo a lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la reunión que tuvo lugar el 19 de abril de 2016<sup>21</sup>.

En este Acuerdo, ambas partes consideran solventadas sus discrepancias en lo que se refiere al artículo 13 y los anexos I y II, en los siguientes términos:

1) Ambas partes entienden que el artículo 13 y los anexos I y II, en el marco de la voluntad expresada en el preámbulo de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de avanzar en la agilización y simplificación administrativa de todas las actividades económicas, deben interpretarse de acuerdo con el régimen general de la libertad de acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio, con arreglo al principio de necesidad y proporcionalidad establecido en los artículos 5 y 17 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

En consecuencia, la presentación de declaraciones responsables para las actividades económicas inocuas, definidas en el artículo 13 como aquellas que, con carácter general, no producen molestias significativas ni ninguna afectación considerable al medio ambiente o la seguridad de las personas ni bienes, se basa en la exigencia del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente, justificados en alguna de las razones imperiosas de interés general, definidas e interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y recogidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, como es la protección de los consumidores, los destinatarios de los servicios y los trabajadores, a la que alude el preámbulo de la Ley 16/2015, de 21 de julio. Estos requisitos deberán ser además proporcionados a la razón imperiosa de interés general que se pretenda salvaguardar.

2) En razón al acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación con el artículo 13 y los anexos I y II de la norma controvertida, y concluida la controversia planteada en cuanto a estos preceptos.

---

<sup>21</sup> *Vid.* DOGC núm. 7129, de 27 de mayo de 2016. BOE núm. 128, de 27 de mayo de 2016.

Por ello, también acuerdan comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertarlo en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

### *2.3. Novedades de carácter organizativo*

En el ámbito organizativo, lo más destacable es la aprobación del Decreto 277/2016, de 2 de agosto, de reestructuración del Departament de Territori i Sostenibilitat. Con arreglo a este Decreto, en el seno de este Departament se sitúa la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, que concentra el grueso de competencias en materia ambiental. A ella, con rango orgánico de secretaría general, corresponden, entre otras, las siguientes funciones: definir e impulsar las políticas ambientales, de cambio climático y de sostenibilidad aplicables a los planes, programas y proyectos de la Generalitat; impulsar y coordinar la participación de esta Secretaría en la política ambiental europea; impulsar, coordinar y hacer el seguimiento de las relaciones bilaterales, transfronterizas e interregionales, de política internacional y de cooperación, que sean de interés para la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, dentro de su ámbito competencial; definir e impulsar la política de información, participación, promoción, educación, investigación y formación en el ámbito del medio ambiente y el desarrollo sostenible, y también la de investigación, desarrollo e innovación en este ámbito; fomentar el desarrollo sostenible en todas las esferas de actividad y con el conjunto de actores con incidencia sobre las políticas ambientales; definir e impulsar las actuaciones del Departamento como órgano ambiental en materia de planes, programas y proyectos; definir e impulsar la política relativa a la protección y gestión del medio natural y de la biodiversidad; impulsar una planificación y gestión integrada en los espacios naturales de protección especial; definir e impulsar las políticas de prevención y control de la calidad del aire y formular y hacer el seguimiento de los planes, los programas y las normativas sobre protección del ambiente atmosférico, acústico y lumínico; definir e impulsar el funcionamiento global y la gestión del sistema de intervención integral que establezca el marco legal vigente y del sistema de evaluación de las actividades sometidas a declaración de impacto ambiental, así como de inspección de actividades con incidencia ambiental; definir e impulsar las políticas relativas a la mitigación y adaptación al cambio

climático; coordinar las actuaciones de inspección de actividades con incidencia ambiental; definir e impulsar el sistema de auditoría y gestión medioambiental y, también, los sistemas de etiqueta ecológica europea y el distintivo de garantía de calidad ambiental; definir e impulsar el sistema de habilitación de las entidades colaboradoras de la Administración ambiental; y coordinar la actuación del conjunto de entidades instrumentales y órganos colegiados adscritos a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

De la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat dependen la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (de ella dependen, asimismo, la Subdirecció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental, la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica, l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic y la Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores), la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (de la cual dependen la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, la Subdirecció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat, la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural y la Secció de Protecció dels Animals de Companyia) y el Àrea d'Assessorament Jurídic en l'àmbit de medi ambient.

La estructura organizativa se competa con determinadas entidades que continúan adscritas al Departament de Territori i Sostenibilitat, mediante la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat: la Agència Catalana de l'Aigua, la Agència de Residus de Catalunya y el Servei Meteorològic de Catalunya.

Cabe mencionar, asimismo, en materia organizativa, el Acuerdo del Gobierno GOV/84/2016, de 21 de junio, sobre la composición y las funciones de la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático<sup>22</sup>, creada mediante el Decreto 573/2006, de 19 de diciembre, de reestructuración parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge, y bajo la dependencia de aquel Departament, con el propósito de que fuese el órgano de coordinación y de impulso de la acción del Gobierno en la lucha contra el cambio climático. Mediante este Acuerdo, se procede a modificar el Acuerdo GOV/145/2011, de 18 de octubre, con el fin de adecuar la composición y las funciones de esta Comisión a la nueva estructura del Gobierno de la Generalitat, después de su última remodelación, a través del Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación

---

<sup>22</sup> DOGC núm. 7148, de 23 de junio de 2016.

del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya.

Tras esta adaptación, la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático, adscrita al Departamento competente en materia de cambio climático, tiene la composición siguiente: la presidencia, ejercida por el consejero del departamento competente en materia de cambio climático; la vicepresidencia, ejercida por un representante del departamento competente en materia de cambio climático, con rango de secretario general o sectorial; y dieciséis vocalías de carácter permanente ejercidas por representantes de los departamentos competentes en diferentes ámbitos sectoriales. Los cambios más importantes que se producen en la composición de la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático son dos. Por una parte, a partir de ahora, la representación no se hará tomando como base los departamentos de la Generalitat, sino los ámbitos competenciales que se considera que pueden ser más relevantes para los objetivos de la Comisión (coordinación interdepartamental, administración local, vivienda, economía, investigación, salud pública, protección civil, cambio climático, ordenación del territorio y urbanismo, infraestructuras y movilidad, sector agropecuario, sector forestal y silvícola, energía, sector industrial y de servicios, acción exterior y educación). De este modo, se evitará que en posteriores remodelaciones se tenga que adaptar de nuevo. Por otra, se incrementan las vocalías de doce a dieciséis.

En otro orden de cosas, también pueden mencionarse en el ámbito organizativo la Orden ARP/174/2016, de 9 de junio, por la que se convocan las elecciones para renovar la composición de la Junta Rectora del Consejo Catalán de la Producción Integrada; el Acuerdo GOV/50/2016, de 26 de abril, por el que se ratifica el acuerdo de separación de la Generalitat de Catalunya del Consorcio para la Gestión de Residuos de El Vallés Occidental, adoptado por el Consejo Plenario del citado Consorcio en la sesión de 24 de noviembre de 2015; el Acuerdo GOV/94/2016, de 28 de junio, por el que se aprueban la modificación y el texto íntegro de los Estatutos del Consorcio Centro Tecnológico Forestal de Cataluña; y el Acuerdo GOV/116/2016, de 2 de agosto, por el que se ratifica el acuerdo de disolución y liquidación simultánea del Consorcio para la Gestión de los Residuos Municipales en las comarcas de El Pallars Jussà, El Pallars Sobirà i L'Alta Ribagorça.



#### 2.4. *El Plan de gestión de los espacios naturales de protección especial de Cataluña 2015-2020 queda sin efecto*

El Gobierno, mediante el Acuerdo GOV/67/2016, de 24 de mayo, a propuesta del *conseller* de Territori i Sostenibilitat, ha dejado sin efecto el Plan de gestión de los espacios naturales de protección especial de Cataluña 2015-2020<sup>23</sup>.

Este Plan, aprobado mediante el Acuerdo GOV/21/2015, de 17 de febrero<sup>24</sup>, aunque había sido bien recibido por el sector del turismo y la hostelería, había recibido importantes críticas por parte de las asociaciones ecologistas. Asimismo, había motivado la aprobación de una Moción —la 230/X, sobre los espacios naturales— por el Pleno del Parlament de Catalunya, en la sesión de 24 de julio de 2015, con posterioridad a la interpelación al Gobierno sobre los espacios naturales protegidos, presentada por el diputado Jordi Terrades i Santacreu, del Grupo Parlamentario Socialista, y las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa<sup>25</sup>. En esta Moción, el Parlamento instaba al Gobierno a paralizar la ejecución del Plan de gestión de los espacios naturales de protección especial de Cataluña 2015-2020 hasta que haya un consenso mayoritario entre las entidades del sector ambiental, los profesionales y los grupos parlamentarios, buscando un nuevo enfoque que permita modernizar las políticas y estructuras de gestión del medio natural; paralizar la prolongada situación de pérdida de dotaciones presupuestarias y la pérdida de recursos humanos en las estructuras de gestión actuales de los espacios naturales protegidos, para revertir la situación de retroceso en que se hallan inmersos; mantener la paralización del expediente de remoción de los actuales directores y responsables de parques naturales, consecuencia de la relación de lugares de trabajo aprobada por el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de cambio de nombre, nivel y complemento específico de los lugares de trabajo de “dirección de parque nacional y natural”, tal como recoge la Moción 215/X del Parlament de Catalunya, sobre las condiciones laborales, de salud y de seguridad de los trabajadores; y aprobar el Proyecto de Ley de la biodiversidad y el patrimonio natural.

---

<sup>23</sup> Publicado en el DOGC núm. 7128, de 26 de mayo de 2016.

<sup>24</sup> Publicado en el DOGC núm. 6814, de 19 de febrero de 2015. Sobre este Plan, *vid.* la crónica “El Derecho ambiental en Cataluña”, publicada en el vol. VI, núm. 1 (2015) de esta Revista.

<sup>25</sup> Moción 230/X del *Parlament de Catalunya*, sobre los espacios naturales (BOPC, X Legislatura, Sexto período, núm. 661, de 28 de julio de 2016).

Ahora, el Gobierno ha decidido dejar sin efecto este Plan, lo cual comporta la paralización definitiva del inicio de expedientes de remoción de los directores y responsables de parques naturales. Esta decisión se justifica, tal y como se indica en el preámbulo del Acuerdo objeto de análisis, porque “Un análisis detallado de su contenido ha permitido observar y detectar algunos desajustes y disfunciones con el marco legal vigente que regula los espacios naturales de protección especial, que hacen aconsejable su reformulación”. Esta reformulación del modelo de gobernanza y de gestión de los espacios naturales deberá llevarla a cabo la Dirección General de Políticas Ambientales, “en el marco de la nueva ley de biodiversidad y patrimonio natural, así como en la Agencia del Patrimonio Natural”. Habrá que esperar, por tanto, tal como se prevé en el Plan de gobierno de esta legislatura<sup>26</sup>, a la aprobación de una nueva ley de biodiversidad y patrimonio natural y a la creación de la Agencia del Patrimonio Natural, para replantear el modelo de gestión de los espacios naturales en Cataluña.

### 2.5. Otros aspectos de interés

Para cerrar esta crónica, queremos destacar otras novedades de interés, acontecidas en el período objeto de análisis. En primer lugar, cabe mencionar que se ha desarrollado una importante actividad de fomento por la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat y del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Así se pone de manifiesto con la aprobación —también modificación— de las bases reguladoras de distintas subvenciones<sup>27</sup> y con la

---

<sup>26</sup> Puede consultarse el Plan de Gobierno de la XI Legislatura en el siguiente enlace: [http://www.govern.cat/pres\\_gov/estilos/govern/pdf/Pla\\_de\\_Govern\\_XI\\_legislatura.pdf](http://www.govern.cat/pres_gov/estilos/govern/pdf/Pla_de_Govern_XI_legislatura.pdf) —última consulta, 13 de octubre de 2016—. En relación con el tema planteado en el texto, *vid.* especialmente, la p. 78.

<sup>27</sup> *Vid.*, por ejemplo, las Órdenes TES/98/2016, de 25 de abril, por la que se modifican las bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones empresariales de Cataluña para la realización de estudios en materia de huella de carbono de productos o servicios, aprobadas por la Orden TES/164/2015, de 21 de mayo (DOGC núm. 7117, de 9 de mayo de 2016), ARP/86/2016, de 14 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de equipos de comunicación para las agrupaciones de defensa forestal, operación 08.03.01, y se convocan las correspondientes a 2016, y ARP/155/2016, de 8 de junio, por la que se modifican las bases reguladoras de las ayudas a la gestión forestal sostenible en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020, aprobadas por la Orden ARP/222/2015, de 15 de julio (DOGC núm. 7144, de 17 de junio); y las Resoluciones TES/1274/2016, de 13 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la ejecución de proyectos de prevención, preparación para la reutilización y reciclaje de residuos industriales y se hace pública su convocatoria (DOGC núm. 7125, de 23 de mayo de 2015), TES/1275/2016, de 13 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular (DOGC núm. 7125, de 23 de mayo de 2015) y TES/1770/2016, de 8 de julio, por la que se aprueban las

convocatoria de numerosas subvenciones en diferentes ámbitos materiales (por ejemplo, en materia de abastecimiento de aguas, residuos y gestión forestal sostenible)<sup>28</sup>.

En segundo lugar, se han establecido los criterios ambientales para el otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental de diferentes productos y servicios (establecimientos hoteleros, centros deportivos, equipamientos culturales —bibliotecas, museos y colecciones—, productos de papel, productos de madera, aceites base regenerados y productos que los incorporan y productos de material compostable).

Por último, mediante la Orden TES/253/2016, de 22 de septiembre<sup>29</sup>, se ha prorrogado la duración del Plan piloto de recolección de setas en el ámbito del paraje natural de interés nacional de Poblet y de su zona de influencia hasta el año 2017 incluido.

---

bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de fomento de la recogida selectiva de la fracción orgánica de residuos municipales (DOGC núm. 7167, de 21 de julio de 2016).

<sup>28</sup> *Vid.*, por ejemplo, las Resoluciones TES/1186/2016, de 3 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones dirigidas a los entes locales para la realización de inversiones para la ejecución de actuaciones de abastecimiento en alta, y la delegación del Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua en su director de las facultades para la aprobación de la correspondiente convocatoria y para resolver el otorgamiento de las subvenciones (DOGC núm. 7119, de 12 de mayo de 2016); TES/1468/2016, de 18 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas para la utilización de árido reciclado de los residuos de la construcción con marcado CE en obras promovidas por los entes locales y empresas públicas municipales de Cataluña (DOGC núm. 7143, de 16 de junio de 2016); TES/1899/2016, de 22 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones consistentes en la realización de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces públicos en tramo urbano durante los años 2016 y 2017, y sus bases reguladoras; ARP/1553/2016, de 9 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada para el año 2016, correspondientes a la mejora de la red viaria para la gestión de los bosques (operación 04.03.03 del PDR) y a las actuaciones silvícolas de mejora y generación de ciclos ecosistémicos (operación 08.05.01 del PDR) (DOGC núm. 7149, de 27 de junio de 2016); ARP/1555/2016, de 9 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de convocatoria de las ayudas para la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada para el año 2016, correspondientes a las reforestaciones y producción de trufa, en el marco de las ayudas de minimis (DOGC núm. 7149, de 27 de junio de 2016); ARP/1898/2016, de 22 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible para el año 2016, para la creación de agrupaciones y organizaciones de productores forestales (operación de PDR 09.00.01) (DOGC núm. 7175, de 2 de agosto de 2016); y ARP/1915/2016, de 26 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada para el año 2016, correspondientes a la redacción y revisión de los instrumentos de ordenación forestal (operación de PDR 08.05.02) (DOGC núm. 7177, de 4 de agosto de 2016).

<sup>29</sup> DOGC núm. 7217, de 30 de septiembre de 2016.

**Sumari:** 1. Dret estatal aplicable a Catalunya. 1.1. Novetats pel que fa a aigües. 1.2. Novetats pel que fa a residus. 1.3. Novetats pel que fa a patrimoni natural i biodiversitat. 1.4. Altres normes d'interès. 2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques. 2.1. La declaració d'inconstitucionalitat de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear creat per la Llei 12/2014, de 10 d'octubre. 2.2. Les discrepàncies competencials entre l'Estat i Catalunya entorn de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 2.3. Novetats organitzatives. 2.4. El Pla de Gestió dels Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya 2015-2020 queda sense efecte. 2.5. Altres aspectes d'interès.

## 1. Dret estatal aplicable a Catalunya

Durant el període objecte d'anàlisi (del 21 d'abril al 30 de setembre de 2016), en l'àmbit estatal hem assistit a una paràlisi de l'activitat normativa des del punt de vista ambiental. Aquesta situació es justifica per la conjuntura política actual, amb un govern en funcions des del 22 de desembre de 2015, amb dues eleccions celebrades i encara sense haver-se constituït un govern nou, amb la possibilitat, encara no descartada, d'unes terceres eleccions. No ens ha d'estranyar, per tant, que les normes ambientals que han vist la llum en aquest període hagin estat molt poques i que totes siguin de rang reglamentari.

Cal destacar l'aprovació, mitjançant l'Acord del Consell de Ministres, en la sessió celebrada el divendres 22 d'abril de 2016, de l'assignació individual de drets d'emissió al tercer conjunt d'instal·lacions que sol·liciten assignació com a nous entrants del període 2013-2020 i es troben incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

Així mateix, hi ha unes quantes actuacions destacables en l'àmbit internacional. En destaquem l'Acord de Cooperació entre el Ministeri d'Economia i Hisenda d'Espanya i el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament relatiu al fons de cooperació Espanya-BERD per a l'energia sostenible en països no receptors d'assistència oficial per al desenvolupament, fet a Londres i Madrid el 19 i 26 d'octubre de 2007<sup>30</sup>; i les esmenes núm. 1 i núm. 2 a aquest acord subscrietes pel Ministeri d'Economia i Competitivitat d'Espanya i el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament<sup>31</sup>. Així mateix, cal esmentar l'esmena a l'annex III del Conveni de Rotterdam per a l'aplicació del procediment de consentiment fonamentat previ aplicable

---

<sup>30</sup> BOE, núm. 103, de 29 d'abril de 2016.

<sup>31</sup> BOE, núm. 132, d'1 de juny de 2016.

a determinats plaguicides i productes químics perillosos objecte de comerç internacional per a la inclusió del metamidofòs (Decisió RC-7/4, adoptada a Ginebra el 15 de maig de 2015)<sup>32</sup>; i les esmenes als annexos 2 i 3 i a la taula 1 de l'Acord sobre la conservació de les aus aquàtiques migratòries afroeuroasiàtiques, adoptades a Bonn el 14 de novembre de 2015, mitjançant la Resolució 6.1<sup>33</sup>.

Com és habitual, en aquest període també s'ha posat de manifest la conflictivitat competencial entre Estat i comunitats autònomes. Bona prova d'això són els recursos d'inconstitucionalitat promoguts pel president del Govern contra determinats preceptes de la Llei de la Comunitat Autònoma del País Basc 6/2015, de 30 de juny, de mesures addicionals de protecció mediambiental per a l'extracció d'hidrocarburs no convencionals i la fractura hidràulica<sup>34</sup>; per més de cinquanta diputats del grup parlamentari Podemos-En Comú Podem-En Marea i del Grup Mixt contra l'article 5 de la Llei 2/2016, de 28 de gener, de mesures fiscals i administratives de la Comunitat Autònoma d'Aragó, quant a les modificacions introduïdes en determinats preceptes de la Llei 10/2014, de 27 de novembre, d'aigües i rius d'Aragó<sup>35</sup>; i pel Consell de Govern d'Andalusia contra els apartats del 3 al 8 de la disposició addicional sisena de la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests<sup>36</sup>. Així mateix, el Govern de Catalunya ha plantejat uns quants conflictes positius de competència contra alguns reglaments estatals<sup>37</sup>.

---

<sup>32</sup> BOE, núm. 145, de 16 de juny de 2016.

<sup>33</sup> BOE, núm. 118, de 16 de maig de 2016.

<sup>34</sup> Admès a tràmit pel Ple del Tribunal Constitucional, per la Providència de 26 d'abril de 2016 (BOE, núm. 109, de 5 de maig de 2016).

<sup>35</sup> Admès a tràmit pel Ple del Tribunal Constitucional, per la Providència de 7 de juny de 2016 (BOE, núm. 144, de 15 de juny de 2016).

<sup>36</sup> Admès a tràmit pel Ple del Tribunal Constitucional, per la Providència de 10 de maig de 2016 (BOE, núm. 121, de 19 de maig de 2016).

<sup>37</sup> *Vid.* els conflictes positius de competència promoguts pel Govern de Catalunya contra determinats preceptes del Reial decret 1007/2015, de 6 de novembre, pel qual es regula l'adquisició, pel Fons de Carboni per a una Economia Sostenible, de crèdits de carboni del Pla d'Impuls al Medi Ambient en el sector de l'empresa "PIMA Empresa" per a la reducció de gasos d'efecte hivernacle en les seves instal·lacions, admès a tràmit per la Providència del Ple del Tribunal Constitucional de 26 d'abril de 2016 (BOE, núm. 109, de 5 de maig de 2016); i contra determinats preceptes del Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual s'incorpora la Directiva 2012/27/UE del Parlament europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, referent a les auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia, admès a tràmit per la Providència del Ple del Tribunal Constitucional de 7 de juny de 2016 (BOE, núm. 144, de 15 de juny de 2016).

D'altra banda, per mitjà de sengles acords de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, s'han resolt les discrepàncies competencials entre l'Estat i Catalunya suscidades entorn de la Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la nova redacció de determinats preceptes de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat; i en relació amb l'article 13 i els annexos I i II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, malgrat que no s'ha evitat la interposició, per part del president del Govern, d'un recurs d'inconstitucionalitat contra l'article 19.6 d'aquesta llei<sup>38</sup>.

### *1.1. Novetats pel que fa a aigües*

En relació amb les aigües, la norma més important que s'ha aprovat en el període objecte d'anàlisi és el Reial Decret 314/2016, de 29 de juliol, dictat a l'empara del que disposa l'article 149.1.16 de la Constitució, que reserva a l'Estat la competència exclusiva pel que fa a bases i coordinació general de la sanitat. Mitjançant aquest reial decret es modifica el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, amb la finalitat d'incorporar a l'ordenament espanyol la Directiva 2013/51/Euratom del Consell, de 22 d'octubre de 2013, per la qual s'estableixen requisits per a la protecció sanitària de la població pel que fa a les substàncies radioactives en les aigües destinades al consum humà. Així, s'adopten nous criteris bàsics per a la protecció de la salut de la població contra els perills derivats de les radiacions ionitzants, naturals o no, per a les aigües de consum humà, i es mantenen, al mateix temps, les línies generals de control establertes en aquesta norma. Per això, es modifiquen diversos articles del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, al qual s'incorpora un nou annex X ("Control de substàncies radioactives en aigües de consum humà") amb la finalitat de recollir totes les particularitats relatives al control de les substàncies radioactives en les aigües de consum humà.

Igualment, aquesta norma modifica el Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i la comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de deu envasades per a consum humà, ja que introdueix noves definicions en l'article 2, i

---

<sup>38</sup> *Vinya. infra* l'apartat 2.2 d'aquesta crònica.

modifica els requisits per a les aigües de deu envasades per al consum humà que conté l'article 14.2.b) i l'annex IV, i incorpora, a més, un nou annex VII ("Control de la dosi indicativa en les aigües de deu i característiques de l'execució analítica").

Finalment, també modifica el Reial decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d'elaboració i comercialització d'aigües preparades envasades per al consum humà, ja que incorpora noves definicions en l'article 2, modifica els requisits per a les aigües preparades envasades per al consum humà que conté l'article 11.b) i la part D de l'annex I, i introdueix un nou annex III ("Control de la dosi indicativa en les aigües preparades envasades per al consum humà i característiques de l'execució analítica").

A aquesta norma se'n sumen d'altres d'abast més concret, també aprovades en aquest període. Ens referim al Reial decret 335/2016, de 23 de setembre, pel qual es prorroga la situació de sequera declarada per a l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer pel Reial decret 355/2015, de 8 de maig, i per a l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Segura pel Reial decret 356/2015, de 8 de maig; i a l'Ordre AAA/1099/2016, de 6 de juliol, per la qual s'autoritza un transvasament des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, per als mesos de juliol, agost i setembre de 2016, a raó de 20 hm<sup>3</sup>/mes.

### *1.2. Novetats pel que fa a residus*

Pel que fa a residus, destaquem l'aprovació de l'Ordre AAA/699/2016, de 9 de maig, per la qual es modifica l'operació R1 de l'annex II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Aquesta norma, dictada a l'empara de l'article 149.1.23 de la CE, té el caràcter de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient i incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2015/1127 de la Comissió, de 10 de juliol de 2015, per la qual es modifica l'annex II de la Directiva 2008/98/CE del Parlament europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives.

Mitjançant aquesta ordre únicament es modifica l'operació de valorització RI "Utilització principal com a combustible o una altra manera de produir energia" de l'annex II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Aquesta modificació es pot dur a terme gràcies al fet que la disposició final tercera de la Llei

22/2011 habilita el ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a actualitzar i modificar-ne els annexos.

### *1.3. Novetats pel que fa a patrimoni natural i biodiversitat*

En l'àmbit del patrimoni natural i la biodiversitat, s'han aprovat dues ordres ministerials d'interès. D'una banda, l'Ordre AAA/1351/2016, de 29 de juliol, ha modificat l'annex del Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades. En particular, s'incorporen a l'annex del reial decret esmentat, que conté la relació d'espècies incloses en el Llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial i, si escau, en el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades, diferents espècies, subespècies i poblacions que no hi figuraven anteriorment i d'altres canvien de situació en el Llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial, amb la finalitat d'adaptar-les a la informació científica actualitzada disponible.

De l'altra, mitjançant l'Ordre AAA/1366/2016, de 4 d'agost, dictada a l'empara del que disposa l'article 149.1.23.a de la Constitució i en exercici de les competències de desenvolupament i execució de l'article 149.1.23.a que han estat reconegudes per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i per la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí, s'han declarat zones especials de conservació de llocs d'importància comunitària de la Regió Marina Mediterrània de la xarxa Natura 2000, s'han aprovat les corresponents mesures de conservació i s'ha proposat l'ampliació dels límits geogràfics de dos llocs d'importància comunitària.

Així mateix, mitjançant la Resolució d'1 d'agost de 2016, de parcs nacionals, s'ha publicat l'aprovació per la UNESCO de la Reserva de la Biosfera Transfronterera Tajo-Tejo Internacional (Espanya i Portugal).

En un altre ordre de coses, cal destacar, en aquest àmbit, l'adopció d'un acord per part de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat. Per mitjà d'aquest acord, ambdues parts coincideixen a considerar resoltes



les discrepàncies que havien manifestat en relació amb l'article únic de la Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la nova redacció de determinats preceptes de la Llei 42/2007<sup>39</sup>.

#### *1.4. Altres normes d'interès*

A més de les normes que hem ressenyat, en el període objecte d'anàlisi podem esmentar altres normes d'interès en àmbits sectorials diversos. En destaquem, pel que fa a mines, el Reial decret 294/2016, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el procediment per a la gestió dels drets miners i dels drets del domini públic d'hidrocarburs afectats pel canvi del sistema geodèsic de referència; pel que fa a substàncies perilloses, l'Ordre PRE/772/2016, de 19 de maig, per la qual es modifica l'annex IV del Reial decret 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics; i, pel que fa a salut en l'àmbit laboral, el Reial decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics.

Finalment, esmentem també l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en àmbits diversos (Reial decret 197/2016, de 13 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a la cooperació per a plantejaments conjunts pel que fa a projectes mediambientals i pràctiques mediambientals en curs, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020; Reial decret 254/2016, de 10 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a la cooperació per al subministrament sostenible de biomassa en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020; i Reial decret 278/2016, de 24 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de voluntariat en el marc del pla de sensibilització i voluntariat a la Xarxa de Parcs Nacionals i centres i finques adscrits a l'Organisme Autònom Parcs Nacionals; i l'Ordre AAA/1433/2016, de 5 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de concessió de subvencions a entitats del tercer sector o organitzacions no governamentals que desenvolupin activitats d'interès general considerades d'interès social en matèria de recerca científica i tècnica de caràcter mediambiental).

---

<sup>39</sup> Es poden consultar els termes d'aquest acord en el BOE, núm. 157, de 30 de juny de 2016, i en el DOGC, núm. 7152, de 30 de juny de 2016.

## 2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques

En el període que hem examinat (del 21 d'abril al 30 de setembre de 2016), l'activitat normativa des del punt de vista ambiental en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat ha estat pràcticament inexistent. En aquest àmbit no s'ha aprovat cap norma de rang legal i només un únic decret des del punt de vista organitzatiu per regular la reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat (el Decret 277/2016, de 2 d'agost). Més enllà d'aquest decret, l'actuació normativa es redueix a poques ordres sobre temes menors aprovades pel Departament del Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Som, doncs, davant d'un període de "sequera" pel que fa a polítiques ambientals i aprovació de noves normes substantives a Catalunya. No hi ha, per tant, novetats normatives rellevants. Les novetats més destacables des d'un punt de vista normatiu estan marcades no per l'aprovació de noves normes, sinó per la declaració d'inconstitucionalitat de les previsions normatives recollides en determinats preceptes de la legislació catalana des del punt de vista ambiental, amb la seva consegüent anul·lació, i per les discrepàncies competencials suscitées entorn d'alguna llei catalana. D'una banda, el Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat de la regulació de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, creat i regulat per la Llei 12/2014, de 10 d'octubre (Sentència 74/2016, de 14 d'abril). D'altra banda, s'han solucionat, mitjançant l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, algunes discrepàncies competencials amb l'Estat entorn de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, si bé no s'ha evitat la interposició de recurs d'inconstitucionalitat contra l'article 19.6 d'aquesta llei.

Quant a les iniciatives legislatives, tampoc no ha començat a tramitar-se en el Parlament cap projecte de llei específic nou en matèria ambiental, tot i que cal esmentar, per la seva connexió amb la matèria ambiental, el Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals<sup>40</sup>. Així mateix, continua el seu curs la tramitació del Projecte de llei de canvi climàtic, del qual vam donar compte en la crònica anterior<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> La iniciativa ha estat publicada en el BOPC núm. 206, de 8 de setembre de 2016.

<sup>41</sup> Es poden consultar els diferents tràmits que han tingut lloc fins ara i l'estat actual de la tramitació d'aquest projecte de llei al següent enllaç: <<http://www.parlament.cat/web/activitat->

En aquesta matèria, el Govern de la Generalitat, en la sessió de 26 d'abril, també ha acordat donar suport a l'Acord de París sobre canvi climàtic, i ha manifestat el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic i la seva voluntat de contribuir als objectius establerts en aquest Acord, d'acord amb la capacitat i potencialitat de la societat catalana. Així mateix, ha acordat revisar els objectius establerts tant en l'àmbit de la mitigació com de l'adaptació, presentar una nova contribució prevista, determinada al més tard el 2020, en el marc dels compromisos establerts per la Unió Europea, i instar el conjunt de la societat catalana perquè també expliciti el suport a l'Acord de París<sup>42</sup>.

D'altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat que s'iniciaran els treballs per preparar una nova llei de qualitat ambiental. Per mitjà de la Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, aquest departament ja ha plantejat els objectius estratègics i operatius que ha de tenir el nou text legal<sup>43</sup>.

En l'àmbit de la planificació, el més destacable és que es deixa sense efectes el Pla de Gestió dels Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya 2015-2020, que s'haurà de reformular en el marc d'una nova llei de biodiversitat i patrimoni natural.

Quant a la planificació hidrològica, en l'actual procés de revisió del Pla de Gestió de la Conca Fluvial de Catalunya, ha començat, en el període analitzat, la fase de retorn del procés participatiu per a la gestió de l'aigua a Catalunya<sup>44</sup>. En aquesta fase, després d'analitzar els resultats del procés participatiu i les propostes presentades pels diferents participants, l'Agència Catalana de l'Aigua, després d'analitzar i estudiar les propostes sorgides de la societat civil per elaborar el nou pla, ha de retre comptes a la ciutadania i determinar quines propostes s'han incorporat i quines no, amb la justificació

---

parlamentaria/siap/index.html?strutsanchor1=detallexpedient.do&criteri=200-00001/11&ad=1> [última consulta, 13 d'octubre de 2016].

<sup>42</sup> Vid. el contingut d'aquest acord al següent enllaç: <[http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/acords\\_govern/2016/2016\\_04\\_26/SIG16TES0530.pdf](http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/acords_govern/2016/2016_04_26/SIG16TES0530.pdf)> [última consulta, 13 d'octubre de 2016].

<sup>43</sup> Vid. el comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de 15 de juliol de 2016 (<[http://premsa.gencat.cat/pres\\_fs vp/docs/2016/07/15/09/47/eb8f4224-eefd-410f-a4ec-1adad2711ff9.pdf](http://premsa.gencat.cat/pres_fs vp/docs/2016/07/15/09/47/eb8f4224-eefd-410f-a4ec-1adad2711ff9.pdf)> [última consulta, 13 d'octubre de 2016]).

<sup>44</sup> Vid. la nota de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de 24 d'abril de 2016 (<[http://premsa.gencat.cat/pres\\_fs vp/appjava/notaprensavv/292411/ca/comenca-fase-retorn-proces-participatiu-gestio-laigua-catalunya.do](http://premsa.gencat.cat/pres_fs vp/appjava/notaprensavv/292411/ca/comenca-fase-retorn-proces-participatiu-gestio-laigua-catalunya.do)> [última consulta, 13 d'octubre de 2016]).

corresponent. A aquests efectes, s'han previst diferents sessions en què es convocaran tots els participants.

Finalment, també cal esmentar l'aprovació per l'Agència Catalana de l'Aigua, a finals de juliol, del Programa de Conservació de Lleres 2016, en el qual es recullen les actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques del districte de conca fluvial de Catalunya per a aquest any<sup>45</sup>.

### *2.1. La declaració d'inconstitucionalitat de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear creat per la Llei 12/2014, de 10 d'octubre*

Recentment s'ha publicat al BOE la Sentència del Tribunal Constitucional 74/2016, de 14 d'abril de 2016<sup>46</sup>. Aquesta sentència declara la inconstitucionalitat i consegüent nul·litat dels articles 1.1.c) i del 21 al 30 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2014, de 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, que regulaven aquest últim impost.

L'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, regulat en la llei esmentada, té per objecte gravar “els riscos per l'impacte i el dany eventual en el medi ambient derivats de l'activitat de producció d'energia elèctrica d'origen nuclear efectuada al territori de Catalunya” (art. 21), i el seu fet imposable és “la utilització de combustible nuclear per a la producció d'energia elèctrica, per l'efecte que pot tenir en el medi ambient i pel dany que eventualment hi pot produir” (art. 23). Pel Tribunal Constitucional, la regulació d'aquest impost és inconstitucional, perquè hi ha equivalència entre aquest impost i l'impost estatal sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoeelèctrica (regulat en els articles del 12 al 18 *quater* de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica, en la redacció donada per la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de

---

<sup>45</sup> *Vid.* la nota de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de 29 de juliol de 2016 (<[http://premsa.gencat.cat/pres\\_fsvp/appjava/notaprensavw/294701/ca/lagencia-catalana-laigua-aprova-programa-conservacio-lleres-2016.do](http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/appjava/notaprensavw/294701/ca/lagencia-catalana-laigua-aprova-programa-conservacio-lleres-2016.do)> [última consulta, 13 d'octubre de 2016]).

<sup>46</sup> BOE, núm. 122, de 20 de maig de 2016.

fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres). En efecte, l'Alt Tribunal afirma que:

[...] la coincidencia entre los elementos esenciales permite concluir no sólo que se grava la misma actividad, sino que se hace también desde la misma perspectiva, sin que obste a la anterior conclusión la parcial afectación de su recaudación a la necesidad de financiar actuaciones de protección civil que, en todo caso, sería esencialmente coincidente en ambos tributos. No se trata ahora, como se afirma en el escrito de la representación procesal de la Generalitat de Cataluña, de un supuesto similar al decidido en la STC 60/2013, FJ 4, en el que se descartó la inconstitucionalidad del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, en su modalidad de gravamen sobre las “actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del nitrógeno” previsto en el art. 2.1 a) de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005. Allí establecimos, efectivamente, que cabe gravar la misma actividad desde dos perspectivas diferentes, concluyendo que no había coincidencia entre el tributo autonómico y el impuesto especial sobre la electricidad, regulado por la Ley 38/1992 de impuestos especiales.

No sucede así en el presente caso, en el que a partir de lo expuesto debemos concluir que las citadas coincidencias sustanciales, en los elementos esenciales de ambos impuestos, suponen la vulneración de los arts. 133.2 y 157.3 CE, así como del art. 6.2 LOFCA, por lo que debe declararse la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 1.1 c) y 21 a) 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear (FJ 4º).

No obstant això, hi ha un vot particular a la Sentència formulat pel magistrat Joan Antonio Xiol Ríos, que manifesta la seva discrepància amb la fonamentació jurídica i amb la resolució de la Sentència, que al seu parer hagués hagut de ser desestimària.

*2.2. Les discrepàncies competencials entre l'Estat i Catalunya entorn de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica*

La Llei catalana 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, ha estat objecte de recurs d'inconstitucionalitat, promogut pel president del Govern contra l'article 19.6<sup>47</sup>. Aquest recurs d'inconstitucionalitat ha estat admès a tràmit pel Ple del Tribunal Constitucional mitjançant la Providència de 28 d'abril<sup>48</sup>. En la mesura que el president del Govern havia invocat l'article 161.2 de la CE, va tenir lloc la suspensió de la vigència i l'aplicació del precepte impugnats des de la data d'interposició del recurs —25 d'abril de 2016— per a les parts del procés, i des de la publicació del corresponent edicte en el *Butlletí Oficial de l'Estat* per als tercers. Aquesta suspensió ha estat aixecada pel Ple del Tribunal Constitucional mitjançant la Interlocutòria de 20 de setembre de 2016<sup>49</sup>.

Tot i que el recurs d'inconstitucionalitat únicament s'ha plantejat contra l'article 19.6, les discrepàncies competencials entre l'Estat i Catalunya han acompanyat altres preceptes de la Llei 16/2015. Així, inicialment, a més de l'article 19.6, també es qüestionaven l'article 13, que inclou els règims d'intervenció aplicables a les activitats econòmiques innòcues i a les activitats econòmiques de baix risc que es duen a terme en un establiment, i els annexos I i II d'aquesta llei, en els quals es recullen, respectivament, les activitats sotmeses a règim de declaració responsable (les activitats econòmiques innòcues) i les sotmeses a règim de comunicació (les activitats

---

<sup>47</sup> Aquest precepte modifica les lletres b) i c) de l'apartat 1 de l'article 79 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. Aquest precepte regula la constitució d'entitats municipals descentralitzades, d'acord amb diferents regles. La iniciativa correspon indistintament a la majoria dels veïns interessats o a l'Ajuntament corresponent; i, després de la modificació operada per la Llei 16/2015, s'imposa que, en cas que la iniciativa correspongui a la majoria dels veïns interessats, l'Ajuntament ha d'adoptar l'acord en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la petició en el Registre Municipal, i que aquest acord determini les competències que, d'acord amb l'article 82, ha d'assumir l'entitat, i el sistema de participació en els ingressos de l'Ajuntament. L'acord s'ha de sotmetre a tràmit d'informació pública en el termini d'un mes. Transcorregut aquest termini, s'ha de remetre al departament competent en Administració local, junt amb la resolució de les al·legacions presentades, la qual s'ha d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. També s'ha de remetre quan l'expedient s'hagi iniciat a instàncies dels veïns, encara que l'acord municipal no sigui favorable.

<sup>48</sup> *Vid.* DOGC, núm. 7117, de 9 de maig de 2016. BOE, núm. 109, de 5 de maig de 2016.

<sup>49</sup> BOE, núm. 235, de 29 de setembre de 2016.

econòmiques de baix risc). No obstant això, la impugnació de l'article 13 i d'aquests annexos s'ha evitat gràcies a un acord adoptat per la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 16/2015, d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, en la reunió que va tenir lloc el 19 d'abril de 2016<sup>50</sup>.

En aquest acord ambdues parts consideren resoltes les seves discrepàncies pel que fa a l'article 13 i els annexos I i II, en els termes següents:

1) Ambdues parts entenen que l'article 13 i els annexos I i II, en el marc de la voluntat expressada en el preàmbul de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, d'avançar en l'agilitació i la simplificació administrativa de totes les activitats econòmiques, han d'interpretar-se d'acord amb el règim general de la llibertat d'accés a les activitats de serveis i el seu lliure exercici, de conformitat amb el principi de necessitat i proporcionalitat que estableixen els articles 5 i 17 de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.

En conseqüència, la presentació de declaracions responsables per a les activitats econòmiques innòcues, definides en l'article 13 com les que, amb caràcter general, no produeixen molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient o la seguretat de les persones ni béns, es basa en l'exigència del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent, justificats en alguna de les raons imperioses d'interès general, definides i interpretades pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i recollides en l'article 3.11 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, com és la protecció dels consumidors, els destinataris dels serveis i els treballadors, a la qual al·ludeix el preàmbul de la Llei 16/2015, de 21 de juliol. Aquests requisits han de ser a més proporcionats a la raó imperiosa d'interès general que es pretengui salvaguardar.

2) Pel que fa a l'acord assolit, ambdues parts coincideixen a considerar resoltes les discrepàncies manifestades en relació amb l'article 13 i els annexos I i II de la norma controvertida i conclosa la controvèrsia plantejada respecte d'aquests preceptes.

Per això, també acorden comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal

---

<sup>50</sup> *Vid.* DOGC, núm. 7129, de 27 de maig de 2016. BOE, núm. 128, de 27 de maig de 2016.

Constitucional, i inserir el present acord en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

### *2.3. Novetats organitzatives*

En l'àmbit organitzatiu, el més destacable és l'aprovació del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat. D'acord amb aquest decret, en el si del Departament se situa la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, que concentra el gruix de competències des del punt de vista ambiental. Li corresponen, amb rang orgànic de secretaria general, entre unes altres, les següents funcions: definir i impulsar les polítiques ambientals, de canvi climàtic i de sostenibilitat aplicables als plans, programes i projectes de la Generalitat; impulsar i coordinar la participació d'aquesta secretaria en la política ambiental europea; impulsar, coordinar i fer el seguiment de les relacions bilaterals, transfrontereres i interregionals de política internacional i de cooperació que siguin d'interès per la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, en el seu àmbit competencial; definir i impulsar la política d'informació, participació, promoció, educació, recerca i formació en l'àmbit del medi ambient i el desenvolupament sostenible, i també la de recerca, desenvolupament i innovació en aquest àmbit; fomentar el desenvolupament sostenible en totes les esferes d'activitat i amb el conjunt d'actors amb incidència sobre les polítiques ambientals; definir i impulsar les actuacions del Departament com a òrgan ambiental pel que fa a plans, programes i projectes; definir i impulsar la política relativa a la protecció i gestió del medi natural i de la biodiversitat; impulsar una planificació i gestió integrada als espais naturals de protecció especial; definir i impulsar les polítiques de prevenció i control de la qualitat de l'aire i formular i fer el seguiment dels plans, els programes i les normatives sobre protecció de l'ambient atmosfèric, acústic i lumínic; definir i impulsar el funcionament global i la gestió del sistema d'intervenció integral que estableixi el marc legal vigent i del sistema d'avaluació de les activitats sotmeses a declaració d'impacte ambiental, així com d'inspecció d'activitats amb incidència ambiental; definir i impulsar les polítiques relatives a la mitigació i adaptació al canvi climàtic; coordinar les actuacions d'inspecció d'activitats amb incidència ambiental; definir i impulsar el sistema d'auditoria i gestió mediambiental i, també, els sistemes d'etiqueta ecològica europea i el distintiu de garantia de qualitat ambiental; definir i



impulsar el sistema d'habilitació de les entitats col·laboradores de l'Administració ambiental; i coordinar l'actuació del conjunt d'entitats instrumentals i òrgans col·legiats adscrits a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

De la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat en depenen la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (de la qual depenen, així mateix, la Subdirecció General de Intervenció i Qualificació Ambiental, la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica, l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic i l'Oficina d'Accreditació d'Entitats Col·laboradores), la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (de la qual depenen la Subdirecció General de Avaluació Ambiental, la Subdirecció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat, la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural i la Secció de Protecció dels Animals de Companyia) i l'Àrea d'Assessorament Jurídic en l'àmbit del medi ambient.

L'estructura organitzativa es completa amb determinades entitats que continuen adscrites al Departament de Territori i Sostenibilitat a través de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat: l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Agència de Residus de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya.

Cal esmentar, així mateix, des del punt de vista organitzatiu, l'Acord del Govern GOV/84/2016, de 21 de juny, sobre la composició i les funcions de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic<sup>51</sup>, creada mitjançant el Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i dependent d'aquest departament, amb el propòsit que fos l'òrgan de coordinació i d'impuls de l'acció del Govern en la lluita contra el canvi climàtic. Mitjançant aquest acord es modifica l'Acord GOV/145/2011, de 18 d'octubre, amb la finalitat d'adequar la composició i les funcions d'aquesta comissió a la nova estructura del Govern de la Generalitat, després de l'última remodelació per mitjà del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Després d'aquesta adaptació, la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, adscrita al departament competent pel que fa a canvi climàtic, té la composició següent: presidència, exercida pel conseller del departament competent pel que fa a canvi climàtic; vicepresidència, exercida per un representant del departament competent pel

---

<sup>51</sup> DOGC, núm. 7148, de 23 de juny de 2016.

que fa a canvi climàtic amb rang de secretari general o sectorial; i setze vocalies de caràcter permanent exercides per representants dels departaments competents en diferents àmbits sectorials. Els canvis més importants que tenen lloc en la composició de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic són dos. D'una banda, a partir d'ara la representació no es basarà en els departaments de la Generalitat, sinó en els àmbits competencials que es consideri que poden ser més rellevants per als objectius de la Comissió (coordinació interdepartamental, Administració local, habitatge, economia, recerca, salut pública, protecció civil, canvi climàtic, ordenació del territori i urbanisme, infraestructures i mobilitat, sector agropecuari, sector forestal i silvícola, energia, sector industrial i de serveis, acció exterior i educació). D'aquesta manera, s'evitarà que en posteriors remodelacions s'hagi d'adaptar de nou. De l'altra, s'incrementen les vocalies, que passen de dotze a setze.

En un altre ordre de coses, en l'àmbit organitzatiu també podem esmentar l'Ordre ARP/174/2016, de 9 de juny, per la qual es convoquen les eleccions per renovar la composició de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Integrada; l'Acord GOV/50/2016, de 26 d'abril, pel qual es ratifica l'acord de separació de la Generalitat de Catalunya del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, adoptat pel Consell Plenari del consorci esmentat en la sessió de 24 de novembre de 2015; l'Acord GOV/94/2016, de 28 de juny, pel qual s'aproven la modificació i el text íntegre dels Estatuts del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya; i l'Acord GOV/116/2016, de 2 d'agost, pel qual es ratifica l'acord de dissolució i liquidació simultània del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals a les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça.

#### *2.4. El Pla de Gestió dels Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya 2015-2020 queda sense efecte*

El Govern, mitjançant l'Acord GOV/67/2016, de 24 de maig, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, ha deixat sense efecte el Pla de Gestió dels Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya 2015-2020<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Publicat en el DOGC, núm. 7128, de 26 de maig de 2016.

Aquest pla, aprovat mitjançant l'Acord GOV/21/2015, de 17 de febrer<sup>53</sup>, tot i que havia estat ben rebut pel sector del turisme i l'hostaleria, havia rebut importants crítiques de les associacions ecologistes. Així mateix, havia motivat l'aprovació d'una moció —la 230/X, sobre els espais naturals— pel Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió de 24 de juliol de 2015, amb posterioritat a la interpel·lació al Govern sobre els espais naturals protegits, presentada pel diputat Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa<sup>54</sup>. Amb aquesta moció, el Parlament instava el Govern a paraitzar l'execució del Pla de Gestió dels Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya 2015-2020 fins que s'aconsegueixi un consens majoritari entre les entitats del sector ambiental, els professionals i els grups parlamentaris, buscant un nou enfocament que permeti modernitzar les polítiques i estructures de gestió del medi natural; a paraitzar la perllongada situació de pèrdua de dotacions pressupostàries i la pèrdua de recursos humans en les estructures de gestió actuals dels espais naturals protegits per revertir la situació de reculada en què es troben immersos; a mantenir la paraització de l'expedient de remoció dels actuals directores i responsables de parcs naturals, conseqüència de la relació de llocs de treball aprovada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de canvi de nom, nivell i complement específic dels llocs de treball de “direcció de parc nacional i natural”, tal com recull la Moció 215/X del Parlament de Catalunya, sobre les condicions laborals, de salut i de seguretat dels treballadors; i a aprovar el Projecte de Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural.

Ara el Govern ha decidit deixar sense efecte aquest pla, la qual cosa ha comportat la paraització definitiva de l'inici d'expedients de remoció dels directores i responsables de parcs naturals. Aquesta decisió es justifica, tal com indica el preàmbul de l'Acord objecte d'anàlisi, de la següent manera: “Una anàlisi detallada del contingut ha permès observar i detectar alguns desajustos i disfuncions amb el marc legal vigent que regula els espais naturals de protecció especial, que en fan aconsellable la reformulació”. Aquesta reformulació del model de governança i de gestió dels espais naturals ha de dur-la a terme la Direcció General de Polítiques Ambientals “en el marc de la nova llei

---

<sup>53</sup> Publicat en el DOGC, núm. 6814, de 19 de febrer de 2015. Sobre aquest pla, *vid.* la crònica “El dret ambiental a Catalunya”, publicada en el vol. VI, núm. 1 (2015) de l'RCDA.

<sup>54</sup> Moció 230/X del Parlament de Catalunya, sobre els espais naturals (BOPC, X legislatura, sisè període, núm. 661, de 28 de juliol de 2016).

de biodiversitat i patrimoni natural, així com en l'Agència del Patrimoni Natural". Caldrà esperar, per tant, tal com preveu el Pla de Govern d'aquesta legislatura<sup>55</sup>, a l'aprovació d'una nova llei de biodiversitat i patrimoni natural i a la creació de l'Agència del Patrimoni Natural per replantejar el model de gestió dels espais naturals a Catalunya.

### 2.5. Altres aspectes d'interès

Per tancar aquesta crònica, volem destacar altres novetats d'interès que s'han esdevingut en el període objecte d'anàlisi. En primer lloc, cal esmentar que s'ha dut a terme una important activitat de foment per part de la Generalitat de Catalunya per mitjà del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Així es posa de manifest amb l'aprovació —també modificació— de les bases reguladores de diferents subvencions<sup>56</sup> i amb la convocatòria de nombroses subvencions en diferents àmbits materials (per exemple, pel que fa a proveïment d'aigües, residus i gestió forestal sostenible)<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Es pot consultar el Pla de Govern de la XI Legislatura al següent enllaç: <[http://www.govern.cat/pres\\_gov/estilos/govern/pdf/pla\\_de\\_govern\\_xi\\_legislatura.pdf](http://www.govern.cat/pres_gov/estilos/govern/pdf/pla_de_govern_xi_legislatura.pdf)> [última consulta, 13 d'octubre de 2016]. En relació amb el tema plantejat en el text, *vid.* especialment la pàgina 78.

<sup>56</sup> *Vid.*, per exemple, l'Ordre TES/98/2016, de 25 d'abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions a associacions empresarials de Catalunya per a la realització d'estudis en matèria de petjada de carboni de productes o serveis, aprovades per l'Ordre TES/164/2015, de 21 de maig (DOGC, núm. 7117, de 9 de maig de 2016); l'Ordre ARP/86/2016, de 14 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició d'equips de comunicació per a les agrupacions de defensa forestal, operació 08.03.01, i es convoquen les corresponents a 2016; i l'Ordre ARP/155/2016, de 8 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, aprovades per l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol (DOGC, núm. 7144, de 17 de juny); i la Resolució TES/1274/2016, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials i se'n fa pública la convocatòria (DOGC, núm. 7125, de 23 de maig de 2015); la Resolució TES/1275/2016, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular (DOGC, núm. 7125, de 23 de maig de 2015); i la Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (DOGC, núm. 7167, de 21 de juliol de 2016).

<sup>57</sup> *Vid.*, per exemple, la Resolució TES/1186/2016, de 3 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, i la delegació del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua en el seu director de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions (DOGC, núm. 7119, de 12 de maig de 2016); la Resolució TES/1468/2016, de 18 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (DOGC, núm. 7143, de 16 de juny de 2016); la Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions consistents en la realització d'actuacions de

En segon lloc, s'han establert els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental de diferents productes i serveis (establiments hotelers, centres esportius, equipaments culturals —biblioteques, museus i col·leccions—, productes de paper, productes de fusta, olis base regenerats i productes que els incorporen i productes de material compostable).

Finalment, mitjançant l'Ordre TES/253/2016, de 22 de setembre<sup>58</sup>, s'ha prorrogat la durada del Pla Pilot de Recol·lecció de Bolets en l'àmbit del paratge natural d'interès nacional de Poblet i de la seva zona d'influència fins al 2017 inclòs.

---

conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà durant els anys 2016 i 2017, i les seves bases reguladores; la Resolució ARP/1553/2016, de 9 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2016, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR) (DOGC, núm. 7149, de 27 de juny de 2016); la Resolució ARP/1555/2016, de 9 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2016, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona, en el marc dels ajuts de mínimis (DOGC, núm. 7149, de 27 de juny de 2016); la Resolució ARP/1898/2016, de 22 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2016, per a la creació d'agrupacions i organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01) (DOGC, núm. 7175, de 2 d'agost de 2016); i la Resolució ARP/1915/2016, de 26 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2016, corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació de PDR 08.05.02) (DOGC, núm. 7177, de 4 d'agost de 2016).

<sup>58</sup> DOGC, núm. 7217, de 30 de setembre de 2016.